

Dispatches **PARAGUAY BOLIVIA COLOMBIA PERU TURKEY**



Carmen Colazo

PARAGUAY

Proyecto de Ley #PorEllas

Paraguay logró en el presente año la aprobación de la “Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia” por la Cámara de Diputados/as –con modificaciones al proyecto base– y la aprobación “en general” por la Cámara de Senadores/as. Esta Ley, que será tratada en particular por el Senado, fue ampliamente debatida por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Participaron en su estudio, consideraciones y lobby el Ministerio de la Mujer (que será ente rector de esta política dentro del Estado), las Comisiones de Equidad y Género de ambas Cámaras del Congreso, y la Corte Suprema de Justicia a través de la Secretaría de Género, la Dirección de Derechos Humanos y el Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ). También participaron la mayoría de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la igualdad de género del país. ONU-MUJERES facilitó consultas de expertas internacionales para que el documento se ajuste a parámetros internacionales de calidad legislativa en la materia.

Si bien el Proyecto de Ley fue ampliamente consensuado a partir de un intenso debate en la Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara de Diputados –Presidida por la Diputada del Partido Avanza País, Rocío Casco– el mismo fue modificado por la Comisión de Derechos Humanos de esta misma Cámara. Los cambios incluyen la mediación en violencia (lo que está prohibido en las leyes integrales de la región debido a la desigualdad de las partes); la eliminación de la palabra ‘género’ y algunas medidas de protección; cambios en las definiciones de ‘feminicidio’ además de otras modificaciones. Al respecto, la titular de la Comisión de DDHH, Olga Ferreira de López, ex integrante del Partido Patria Querida –conservador de tinte confesional– manifestó que las modificaciones se ajustaban a los principios católicos, apostólicos y romanos, pese a que el país ha separado la Iglesia del Estado en la Constitución de 1992.

Se espera que la Cámara de Senadores restituya el proyecto inicial de la Comisión de Equidad Social y Género para favorecer la sanción de una Ley que sea realmente útil para defender los Derechos Humanos de las mujeres frente a los distintos tipos de violencia. Solo con la implementación de políticas integrales contra la violencia hacia las mujeres el Ministerio de la Mujer, junto a las demás instituciones del Estado y ONG, podrá colaborar en una respuesta integral, interinstitucional y multidisciplinaria a las violencias de género.

VER. <http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/se-presento-ante-medios-de-comunicacion-el-proyecto-de-ley-porellas>

FIRMA LA PETICIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL POR ELLAS.

<http://www.amnesty.org.py/actua/acciones/es-urgente-una-ley-integral-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres>



Carmen Beatriz Ruiz

BOLIVIA

¿Terminó la Luna de Miel?

El fin del año 2016 está resultando particularmente conflictivo en cuanto a gobernanza en Bolivia. En primer lugar, porque se han comenzado a sentir los efectos de la crisis económica en la región, particularmente por el bajo precio de los minerales e hidrocarburos.

Aunque no pueda hablarse, propiamente, de recesión, la economía ha crecido a menos de 4.5 por ciento, requisito establecido por el gobierno para pagar, por tercer año consecutivo, un segundo aguinaldo.

Como era de prever, esto generó una serie de conflictos y movilizaciones sociales, que se sumaron a la alta y diversa conflictividad que el gobierno ha estado enfrentando por otros motivos económicos y políticos, 61 en promedio mensual, según el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).

Aunque las próximas elecciones generales son recién el año 2019, la agenda de gobernanza en Bolivia incluye temas electorales. El principal elemento es la presión de líderes sindicales y del entorno político del Presidente para que éste se postule por cuarta vez, en contra de la Constitución Política del Estado, lo que supone modificarla.

La oposición, varios medios de comunicación independientes, líderes de opinión pública y la propia ciudadanía, según resultados del Referendo realizado en febrero de este año, ya manifestaron una posición negativa al respecto. Pero discursos y contra discursos de Evo Morales y sus principales seguidores alimentan la incertidumbre.



César Torres

COLOMBIA

Plebiscito, limbo y movilización social

Después de más de cuatro años de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, se logró firmar un acuerdo que ponía fin a la confrontación armada que ha durado más de 50 años. Por decisión del Presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón, esos acuerdos debían ser ratificados en un plebiscito.

El plebiscito no era necesario jurídicamente porque en Colombia el Presidente tiene el poder constitucional y legal para desarrollar tanto las estrategias que considere convenientes en favor de la construcción de paz como para llegar a los acuerdos que sean necesarios para que todos los ciudadanos/as puedan ejercer su derecho a la paz. El plebiscito fue más bien una estrategia política con la que el Presidente buscaba legitimar los acuerdos de La Habana en la opinión pública para facilitar así su implementación, con lo cual se lograría, además, blindar social y políticamente los mismos.

Había que escoger entre el SÍ y el NO apruebo los acuerdos de La Habana. Y los votantes, por un exiguo número de votos no los aprobaron. Ganó el NO por menos del 0,5% de votos. Y entonces el hecho político del plebiscito tuvo un efecto jurídico inesperado: los acuerdos de La Habana quedaron sin efecto y Colombia tendría dos alternativas: o regresar a la guerra entre las FARC y el Estado, o pactar otros acuerdos.

Devolverse a la guerra no parece posible ni viable sobre todo porque la ciudadanía ha respondido con movilizaciones masivas promoviendo formas de refrendación no muy usuales como los cabildos abiertos. A ello se suma el comportamiento de las FARC que han dicho en varias oportunidades –y de todas las maneras posibles– que no regresarán a la confrontación armada, que reconocen sus crímenes, excesos y errores ante algunas de las poblaciones que más victimizaron. Así, aún los más fervientes partidarios del conflicto armado saben que no hay condiciones favorables para devolver el país a esa forma de violencia.



y Paola Jiménez

La campaña en favor del No al plebiscito convocó a actores diversos que evidenciaron su oposición frente a aspectos medulares de los acuerdos, principalmente las propuestas en torno al esclarecimiento de la verdad, la restitución de tierras despojadas y el alcance jurídico de los acuerdos en el ordenamiento jurídico nacional. Se sumaron además actores institucionales y de la sociedad civil –principalmente iglesias– que denunciaron la existencia de una “ideología de género” en los acuerdos que atentaba contra la integridad y sobrevivencia de la familia como eje fundamental de la sociedad, ello fue crucial a la hora de lograr la reducida mayoría reseñada líneas arriba.

Ante los resultados del plebiscito el gobierno inició un proceso de consultas con los sectores opositores y expresiones organizadas de la sociedad civil que solicitaron ser escuchadas para exponer sus preocupaciones frente a posibles retrocesos en los contenidos de los acuerdos en aspectos como la incorporación de enfoques transversales. Las propuestas fueron llevadas a un nuevo espacio de negociación con las FARC y, luego de un poco más de un mes de conocerse los resultados del plebiscito, se anunció un nuevo acuerdo de paz que incluye cambios, aclaraciones y ampliaciones en torno a la reparación de las víctimas, los mecanismos de justicia a ser implementados y el alcance del enfoque de género de los acuerdos, entre otros.

La realización de nuevas consultas ha sido descartada como opción a seguir y el cese al fuego logrado entre las partes parece deteriorarse con el paso del tiempo. En este sentido, el futuro de los acontecimientos inmediatos dependerá jurídicamente de la efectividad de los mecanismos de refrendación que defina el gobierno nacional y políticamente del pulso entre los sectores que, por diversos intereses, se oponen a la finalización del conflicto. Sin embargo, los movimientos sociales y populares apoyan los acuerdos de paz e identifican en sus contenidos oportunidades claras de avanzar hacia mayores niveles de equidad y justicia social.

editor’s note: On November 30, 2016, Colombia’s Congress approved the adjusted peace accords. Key adjustments to the accords were made following the plebiscite. See the adjustments here: <http://colombiapace.org/2016/11/15/key-changes-to-the-new-peace-accord/>

PERÚ

Nuevo gobierno, continuismo económico

El Perú tiene nuevo Presidente de la República desde julio de este año, 2016, como resultado de la contienda electoral más reñida y ajustada de la historia del país que terminó con el triunfo de Pedro Pablo Kuczynsky sobre Keiko Fujimori, la hija del ex presidente Alberto Fujimori preso por crímenes de lesa humanidad. Este resultado fue favorecido por algunas señales de mayor respeto a la democracia y al Estado de Derecho, aun cuando ambos candidatos, por sus antecedentes, coincidían en lo fundamental: la continuidad del modelo neoliberal exportador extractivista, la promoción de grandes capitales, y la complacencia y laxitud frente a débiles políticas laborales y ambientales.

Por otra parte, la mayoría casi absoluta del Parlamento Nacional quedó en manos del partido de la candidata perdedora, con un muy amplio poder para fiscalizar las acciones del gobierno y negociar la marcha de las políticas públicas. Luego de unas semanas de acomodos y negociaciones entre ambos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), el gobierno recibió facultades extraordinarias y perentorias para formular y decretar normas en materia económica, fiscal, seguridad ciudadana y servicios básicos fundamentalmente.

Sin embargo, a casi seis meses de la nueva administración política no se aprecian mayores cambios salvo algunas iniciativas para superar trabas burocráticas y estimular la inversión privada; y medidas muy mediáticas para enfrentar la compleja y sentida inseguridad ciudadana que afecta a la mayoría de la población y que compromete severamente la reputación de importantes instituciones tutelares del país.



Carlos Herz

Por otro lado, continúan los conflictos socioambientales generados principalmente por actividades extractivas (70%), como en el caso de los reiterados derrames de petróleo que afectan los ríos y territorios de las comunidades nativas amazónicas, o de situaciones de abuso de grandes empresas mineras en el sur (Marcona y Apurímac) en manos de capitales chinos. La reacción del gobierno para buscar soluciones a tales conflictos es lenta y está más enfocada en preservar los beneficios de las actividades extractivas antes que recuperar la confianza de las poblaciones locales afectadas.

Quizás sea demasiado pronto para conocer o interpretar el rumbo económico que tomará el actual gobierno. Sin embargo, en las declaraciones públicas no se perciben nuevas propuestas relacionadas al modelo económico primario exportador de commodities que como piloto automático se ha mantenido vigente en el país desde el gobierno de Fujimori. Se esperaría planteamientos como la diversificación de las potencialidades de desarrollo económico para crear mercados y consumidores locales, y para fortalecer la siempre golpeada clase trabajadora y el sector de la pequeña empresa.

Turkey **POST COUP**



Zeynep Baser
Istanbul

On July 15, a military coup was attempted in Turkey against President Erdoğan and the democratically elected Justice and Development Party government (Turkish: Adalet ve Kalkınma Partisi, known as the AK Party) by a group within the armed forces. The coup attempt was defeated, and the government claimed that Fethullah Gülen, a former ally and an exiled cleric based in Pennsylvania, orchestrated the coup attempt. Gülen so far has denied allegations, however it can easily be said that the public opinion in Turkey, including both supporters of the government and different segments of the opposition, including opinion leaders and journalists have little doubts about Gülen's involvement in the coup. The bitter political contest between the Gülenist movement and the government and the Gülen network's influence inside the judicial and security apparatus were already widely known in Turkey before the coup. The tensions were exemplified in the trials known as Sledgehammer and Ergenekon. These trials put hundreds of individuals on trial in 2013 for plotting against the government. So, although the extent of infiltration by Gülenists into the army surprised many, the possibility of such involvement did not come as a surprise to the Turkish public.

While the July 2016 coup was defeated, democracy also has not improved in Turkey as a result. Immediately following the defeat of the attempted coup, the mood in Turkey was optimistic and there was hope that this defeat would present an opportunity for national reconciliation of a widely divided and polarized society, as well as reinforcement of democratic rule of law. People had taken to the streets to avert the coup, the majority of the public, not just AK Party supporters, had stood together against the coup, and political parties, civil society organizations and media had put their political differences aside to emphasize their support for a political solution and civilian rule. Unfortunately however, this historic opportunity was missed.

On July 21, revoking Article 121 of Turkey's Constitution, the Parliament voted in favor of declaring a state of emergency for three months - a move which President Erdoğan said was necessary to allow "swift and effective" measures against the Gülen movement, and to "eliminate the threat against democracy." According to the Article 121 of the Constitution, the state of emergency allows the cabinet under the chairmanship of the president to issue decrees that have the force of law on matters relating to the state of emergency. In October 2016 the state of emergency was extended for another three months.

What has followed is a breach of democracy and human rights on an unprecedented and alarming scale. Following the coup attempt, criminal investigations were started for over 70,000 people on accusations

of having connections with Gulen, and the estimated number of those arrested by October 2016 was around 35,000. The European convention on Human Rights was suspended following the declaration of the state of emergency.

With the emergency decrees, detention without legal review for terrorism-related offences and organized crime has been extended to 30 days (from 4 days); detainee's right to see a lawyer has been denied for up to five days and severe restrictions have been imposed on the right to choose a lawyer during police detention. There have been numerous claims of torture and misconduct by security officers of those arrested or in custody. The government has also facilitated debates to reintroduce the capital punishment.

Meanwhile a massive purge has been under the way, and over 60,000 civil servants have been sacked from the military, the judiciary, the police, the universities and other state institutions with the emergency decrees. Over a thousand schools and 15 private universities have been shut down and well over a thousand associations and foundations have been closed. Dozens of media outlets have been shut down and it is estimated that over one hundred journalists have been arrested since July on accusations of supporting the coup or the PKK.

It must be mentioned that not all the individuals or institutions that are impacted by the above measures are linked to Gulen. To the contrary a significant number of these individuals or institutions are known to be associated with leftist and/or Kurdish political movements, which has raised suspicions as to the true intention of these purges being cleansing state of all critical, and not just Gulenist, voices. One of the most recent manifestations of this criticism has been the arrests of the managers and

journalists of the Cumhuriyet daily, known for its secularism and criticism of Erdoğan.

Contrary to the statements by President Erdoğan, since the defeat of the coup, Turkey has not strengthened its democracy and respect for the rule of law. In November, the World Justice Project ranked Turkey 99th out of 113 in its Rule of Law Index, just behind Iran and Myanmar. Under the state of emergency, the President and the AK Party government have been ruling Turkey through emergency decrees, effectively bypassing the Parliament as well as the Constitution, while granting arbitrary powers to the police and state officials, and violating rights. The main opposition party, CHP, applied to the Constitutional Court to review the emergency decrees but the application was declined.

On the other hand, the government is using the emergency decrees to suppress the Kurdish political movement. Members of Parliament from the Peoples' Democratic Party (Turkish: Halkların Demokratik Partisi, HDP) have been jailed, along with many Kurdish mayors and party members. The arrested MPs include the party's co-leaders, Selahattin Demirtaş and Figen Yüksekdağ. Earlier in May 2016, prior to the coup, the Parliament had voted to lift the immunity from prosecution of 138 MPs, the vast majority of whom were from opposition parties.

Turkey's position as an anchor in the complex politics of the Middle East and its role as a buffer state in the fight against ISIL have been seriously compromised. The European Parliament has voted to temporarily freeze discussions on Turkey's bid for EU membership, a vote that is non-binding but nonetheless strongly symbolic. Turkey's relations with its European allies are clearly stressed by this repressive crackdown.



JGG photos taken in Mardin, Turkey, December 2014. HDP had won the municipal elections in Mardin and municipal government had a co-mayorship, with a male and female mayoral sharing arrangement, a policy of the HDP. The woman with the consulting team was the co-mayor. Mr. Ahmet Turk, co-mayor of Mardin for HDP, was arrested in November 2016 as part of the government's "terror probe" of the HDP party.

Celebrating 10 Years and a New Office

After ten years, JGG has consolidated its network modality with a social enterprise approach to business. The network of professionals who work in areas of human rights, democratic development, legal and judicial reform, security, conflict and peace, among other issues in the broader governance sector, has grown from an Americas-based network to one that encompasses professionals in other regions, especially from countries in transition or countries affected by conflict.

The network connects on issues and professional practice through our publications, *Multiples* and *Co-Praxis*, and through internal initiatives. At present, JGG maintains contact with professionals in various countries but with a particular focus on Bolivia, Colombia, Peru, Paraguay, Guatemala, Canada, Palestine, Turkey, and Ukraine.

The network approach has allowed JGG to be flexible in its structure and work arrangements as international development cooperation shifts thematic and geographic priorities. In October, JGG moved into new offices in Ottawa. The new office provides work space for university interns, who contribute regularly to JGG, and will provide space for JGG to host roundtable discussions or workshops.

To mark our 10th anniversary JGG will plan events in 2017, including discussions that link Ottawa-based participants with our network contacts.



Evaluation of a National Electoral Monitoring Consortium

From May through August 2016, a JGG team completed an evaluation for the National Democratic Institute (NDI) in Guatemala. Otto Valle (Guatemalan), Alejandra Barrios Cabrera (Colombian), and Luz Helena Hernandez (Colombian resident in Guatemala) conducted data collection to assess the support provided by NDI to a consortium of nine non-governmental organizations called *Mirador Electoral*. The JGG Executive Director, Kimberly Inksater, undertook quality assurance and coordination functions.



NDI Evaluation Focus Groups, Coban

news

New Experience in Project Implementation

For several months in 2016, Kimberly Inksater maintained the leadership of JGG and performed acting director functions in the International Initiatives Department at the Canadian Bar Association (CBA). Part of that position involved directing the National Legislative Development Vietnam (NLD) project from the CBA's Ottawa offices. Ms. Inksater will continue as project director for the NLD project while working from JGG offices, and will also undertake other consultancies and coordinate JGG's knowledge sharing and other initiatives.

Staff changes

Elaine Bruer has been employed with JGG for nine years and has helped oversee and administer JGG's Ottawa functions over those years. Besides supporting all of the regular operations of consultancies, knowledge sharing, and office management, she has cheerfully organized office moves, strategic planning workshops, open houses, and the JGG internship program, among other tasks. We are sorry to see Elaine move on to other adventures but we wish her the best and extend our thanks for her years of dedication to JGG.



Elaine Bruer
Ottawa

JGG is seeking a half-time office manager to replace this multi-talented woman.

Just Governance Group

Contact Information

Kimberly Inksater, Director: kj.inksater@justgovernancegroup.org
Elaine Bruer, Corporate and Office Manager: e.bruer@justgovernancegroup.org
Carmen Beatriz Ruiz (Bolivia): cb.ruiz@justgovernancegroup.org

Skype: JustGovernanceGroup
Tel: 613-729-5612
Fax: 613-729-1085
info@justgovernancegroup.org

www.justgovernancegroup.org

